



DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL
MAGISTRADA PONENTE: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
"Al servicio de la justicia
y de la paz social"

S - 058

Procedimiento: Verbal

Demandantes: Alberto Antonio Martínez Zapata y María Cristina Agudelo Acevedo

Demandados: Juan Manuel González Moreno y herederos de Luis Fernando Ramírez Gómez

Radicado Único Nacional: 05001 31 03 002 2019 00160 01

Procedencia: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín

Decisión: Confirma sentencia apelada

Medellín, ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Cuestión: Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida el 1º de febrero de 2023 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín.

Temas: Responsabilidad civil extracontractual en ejercicio de actividades peligrosas, la imputación del hecho.

ANTECEDENTES

Procedente del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín, por virtud de la apelación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia proferida el 1º de febrero de 2023, ha llegado a esta Corporación el proceso verbal promovido por Alberto Antonio Martínez Zapata y María Cristina Agudelo

Acevedo, en contra de Luis Fernando Ramírez Gómez y Juan Manuel González Moreno.

PRETENSIONES:

«PRIMERO: Que se declare que los señores LUIS FERNANDO RAMÍREZ GOMEZ...en calidad de propietario del rodante y JUAN MANUEL GONZALEZ MORENO...son solidariamente responsables de los daños materiales, fisiológicos y morales sufridos por el señor ALBERTO ANTONIO MARTÍNEZ ZAPATA, en hechos acaecidos el 9 de junio de 2010, siendo las 8:40 de la noche, en la carrera 81 número 42-30 de Medellín.

SEGUNDO: Que en consecuencia de la anterior declaración, se condenen al pago de los perjuicios materiales determinados en lucro cesante consolidado y futuro ocasionados, por los valores que a continuación se determinan así: -

© LUCRO CESANTE CONSOLIDADO, hace referencia a lo dejado de percibir en razón a su pérdida de capacidad laboral, que hace referencia, a una invalidez que le impide laboral desde la fecha del accidente hasta la presentación de la demanda en salarios mínimos (sobre el porcentaje indicado), año por año por valor de 21.507.528.44 conforme tabla a continuación:

AÑO	SALARIO DEJADO DE PERCIBIR CONFORME PORCENTAJE	VALOR PERDIDA Valor por número de meses
2010	\$194.258,00	\$1.165.548,00
2011	\$202.028.32	\$2.424.339,84
2012	\$213.759.24	\$2.565.110,88
2013	\$222.359.40	\$2.668.312.80 ^u
2014	\$232.355.20	\$2.788.262.40
2015	\$243.048.82	\$2.916.585.84
2016	\$260.062.43	\$3.120.749.16
2017	\$278.266.85	\$3.339.202.20
2018	\$294.684.48	\$3.536.213.76
2019	\$312.365.36	\$937.096.08
TOTAL	\$2.464.843.58	\$21.507.528.44

© LUCRO CESANTE FUTURO, respecto a la esperanza de vida del demandante, de acuerdo a la tasa de supervivencia, como hecho

notorio se tiene que el demandante, respecto al salario devengado al momento del accidente, menos 96 meses de lucro consolidado sería 231, al salario actual, reducido en un 37.72% para un total de SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIECISES CENTAVOS (\$72.156.398.16).

TERCERO: sean reconocidos y pagados los perjuicios morales y de relación padecidos los mismos que se tazan en CINCUENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, Y CINCUENTA SALARIOS MINIMOS por los perjuicios morales para cada uno de los demandantes». (sic pdf. 13).

Lo anterior, con fundamento en hechos que así se compendian:

Que el «9 de junio de 2010, siendo las 8:40 de la noche, en la carrera 81 numero 42 - 30 de Medellín, se tuvo noticia de un accidente de tránsito, donde resultó afectado como peatón el señor ALBERTO ANTONIO MARTÍNEZ ZAPATA», y en el que estuvo involucrado un vehículo tipo moto de placa ZJF20A, conducido por el señor Juan Manuel González Moreno, que colisionó contra la humanidad del señor Martínez Zapata.

Que «debido a la ausencia de prueba y a la falta de participación del trámite contravencional de la víctima, la Secretaria de Tránsito y Transporte se abstuvo de proferir responsabilidad en dicho aspecto».

Que producto de dicho accidente el señor González Moreno fue trasladado al Hospital General de Medellín, donde le fue garantizada su atención, con cargo al Soat expedido por QBE Seguros, y se le diagnosticó con traumatismo intracraneal, fractura de fémur y otros traumas, requiriendo hospitalización por 12 días.

Que el señor González Moreno, después de haber sido dado de alta, está a punto de perder su pierna izquierda, quedando con una deformidad física y serios problemas fisiológicos.

Que aun padece quebrantos de salud, situación que lo llevó a quedar por fuera del mercado laboral desde la fecha del accidente y a verse impedido para desarrollar la actividad laboral que desempeñaba como «colocador de apuestas», por la que recibía un salario mínimo legal mensual, privándose él y su núcleo familiar de lo necesario para su subsistencia.

Que la señora María Cristina Agudelo, esposa del señor González Moreno, no puede laborar debido a que debe cuidar de su consorte, quien fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 37.72%.

Que los demandantes están afectados en su vida de relación, comoquiera que perdieron su vida social. Además de estar moralmente afectados, pues a causa del accidente el señor González Moreno presenta una notoria deformidad en su pierna que, afirmó, lo pone a la vista de los demás y lo hace sentir como un fenómeno, esto sumado al hecho de no ser laboralmente productivo.

RÉPLICA

La demanda fue admitida por auto fechado el 22 de abril de 2019 (pdf. fl.14), el cual fue notificado mediante curador *ad litem* a los demandados, Juan Manuel González Moreno y a los herederos indeterminados de Luis Fernando Ramírez Gómez (en el curso del proceso se acreditó su fallecimiento, ver pfd.42), quien procedió a contestar la demanda de la siguiente manera (pdf.34 y 51):

Manifestó no constarle los hechos descritos en el libelo genitor y que los relacionados con el informe policial de accidente de tránsito y la resolución 858 expedida por la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, el 12 de julio de 2012, constan en el trámite contravencional. Se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las «excepciones» de «hecho exclusivo de la víctima» y, en su defecto, «reducción de la indemnización por exposición de la víctima al daño en forma imprudente», al considerar que esta transitaba por un lugar que no estaba habilitado para el paso de peatones; «ausencia de hecho generador de responsabilidad por parte del señor Luis Fernando Ramírez», ya que este trasladó la guarda material y jurídica de la actividad peligrosa al señor Juan Manuel González Moreno, sin que exista prueba de su

intervención en la ocurrencia de los hechos; «tasación excesiva del perjuicio», en tanto que los valores pretendidos superan los montos reconocidos por la jurisprudencia.

SENTENCIA IMPUGNADA

Trabada la relación procesal, se dictó sentencia en la cual se resolvió lo siguiente:

«PRIMERO: SE DECLARA la ausencia de prueba de los presupuestos axiológicos de la acción de responsabilidad civil invocada teniendo en cuenta que la parte demandante si bien estaba exonerada de probar la culpa, no probó que la ocurrencia del hecho fuera atribuible a la conducta de la parte demandada, de acuerdo a las consideraciones hechas en la presente sentencia.

SEGUNDO: En consecuencia, SE DESESTIMAN las pretensiones de la demanda.

TERCERO: NO SE CONDENA a la parte demandante a la sanción del artículo 206 del CGP, atendiendo a lo indicando en esta sentencia.

CUARTO: NO SE CONDENA a la parte demandante al pago de costas por el amparo de pobreza que les fue concedido».

Para decidir de la manera como lo hizo, la señora juez *a-quo*, previa referencia a los presupuestos procesales para decidir de fondo y aludir a los problemas jurídicos que estimó debían resolverse, se refirió a los elementos valorativos de la pretensión por responsabilidad civil derivada del ejercicio de actividades peligrosas y a las excepciones de mérito propuestas para enervarla. Que por tratarse de una actividad peligrosa, de acuerdo a lo determinado por la jurisprudencia, la parte demandante se exonera de la acreditación de la culpa de la demandada, pues esta se presume, correspondiéndole únicamente probar el ejercicio de la actividad peligrosa, el daño y el nexo causal, los que, una vez configurados, solo permitirían la exoneración de responsabilidad si se demuestra la ocurrencia de una causa extraña.

Tras mencionar los hechos descritos en la demanda con relación a la ocurrencia de los hechos, relacionó las pruebas documentales obrantes en el expediente, referentes al informe policial de accidente de tránsito y el croquis anexo al mismo, para expresar que *«se puede verificar que la hipótesis o posible causa del accidente en el cual resultó lesionado el demandante no fue determinada por cuenta del agente de tránsito»*. Aludió a la Resolución 858 del 12 de julio del año 2010, para indicar que en esta el inspector de tránsito se abstuvo de imputar responsabilidad contravencional a los involucrados, por considerar que no existían pruebas suficientes que permitieran determinar la manera como ocurrieron los hechos. Dio cuenta que, según la historia clínica del demandante, se puede verificar las lesiones físicas y las afectaciones padecidas. Citó apartes del interrogatorio absuelto por la codemandante María Cristina, quien aludió a las lesiones sufridas por la víctima directa y a las dificultades que actualmente presenta este para poder laborar, así como a las afugias económicas que atraviesan desde que ocurrió el accidente.

Luego, la juez determinó que «en principio», el hecho de la ocurrencia del accidente del 9 de junio de 2010 está probado, *«por cuanto el demandante al cruzar la avenida ochenta fue atropellado por el conductor de la motocicleta»*, pero consideró pertinente analizar si efectivamente con el material probatorio obrante *«se puede determinar que el hecho ocurrió por cuenta de la conducta del conductor de la motocicleta»*. Recordó que la parte demandada alegó la existencia de una causa extraña, consistente en el hecho de la víctima, fundada en que esta cruzó la vía vulnerando las normas en materia de tránsito consagradas para los peatones como actores viales.

Para la juzgadora *«no existe una prueba que permita determinar la manera como ocurrió el hecho»* y que si bien el demandante refiere en su declaración *«que al cruzar la avenida ochenta fue atropellado por el conductor de la moto cuando ya iba a llegar al separador de la vía, no se puede dejar de lado que él mismo indicó que no recuerda absolutamente nada de lo ocurrido y que ni siquiera alcanzó a ver la motocicleta cuando lo iba atropellar o cuando se acercaba a él»* pero que este *«no refiere a ver visto ni la moto ni los ocupantes y tampoco se puede señalar que quien conducía iba a una velocidad superior, por cuanto él indicó que no lo vio cuando ya iba a llegar al separador»*.

Agregó que si se observa el croquis del accidente de tránsito, contrario a lo manifestado por el demandante en su declaración, se puede verificar que este no estaba cerca del separador cuando ocurrió el atropellamiento, sino casi en medio de la vía, en una vía que se comprende de dos carriles. Y que es claro que el demandante solo iba cruzando el primero de los dos carriles cuando ocurrió el atropellamiento, lo cual indica que en efecto no pudo suceder que la motocicleta salía de la nada como lo manifestó el demandante. Además, que no se puede olvidar que la avenida 80 es una vía amplia, lo que debe generar en los peatones mayores precauciones al momento de transitar; que no se advierten señales de tránsito para determinar la velocidad a la que debía transitar el demandado; y que el accidente se presentó en horas de la noche, lo que limita la visibilidad para peatones y conductores.

Explicó que *«no se tiene una declaración adicional a la del demandante, que ni siquiera recuerda en forma clara y concreta cómo ocurrieron los hechos puesto que perdió el conocimiento de una manera muy rápida»* y que *«no existe entonces un elemento de prueba que pueda ser valorado...como ...eximente del actuar de la parte demandante en el hecho y, mucho menos aún, que pueda efectivamente determinar la responsabilidad en cabeza de quien conducía la motocicleta, puesto que los dos únicos elementos o los tres únicos elementos de prueba, mejor, que pueden valorarse por este despacho son... dos de los que valoró el inspector de tránsito, que consideró que no existía una posibilidad de determinar responsabilidad en materia contravencional, y la otra es precisamente aquella resolución proferida por esa autoridad en materia de tránsito que podría permitir efectivamente determinar la responsabilidad en cabeza de alguno de los actores, especialmente, del conductor de la motocicleta...»*.

Dijo que no debe dejarse de lado el Código Nacional de Tránsito, en cuyos artículos 57 y 58 establece normas sobre el tránsito de peatones y prohibiciones de la circulación de los mismos, puesto que, cerca de donde ocurrió el accidente existe un puente peatonal que no utilizó el demandante, quien no tuvo en cuenta que era de noche y que se trata de una vía altamente concurrida y transitada que no está permitida para el tránsito de peatones.

Concluyó *«que si bien no se pudo determinar una exoneración del demandante en la ocurrencia del hecho... el actuar del demandante sí pudo*

haber causado el accidente de tránsito; sin embargo, como tampoco puede determinarse a ciencia cierta, porque no se tienen elementos probatorios suficientes de la existencia del hecho en el ejercicio de actividades peligrosas, no puede tampoco endilgarse responsabilidad a la parte demandada».

IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión la parte demandante se alzó en su contra, alegando como reparos concretos los que pasan a individualizarse (**dentro de los tres días siguientes a la audiencia**).

PRIMERO. Que *«no es clara la apreciación del despacho respecto a la responsabilidad que dice no caber en cabeza del demandado conductor del vehículo, entendiéndose ésta como si se tratara de una falta de legitimación en la causa del presente asunto. Dentro de los argumentos presentados por el despacho, se habla de que mi poderdante en tratándose de una actividad peligrosa, está exonerándose de probar la culpa, estando así en aplicación de una teoría objetiva de responsabilidad, que pone en cabeza de quien originó el daño la forma de exonerarse a través de una causa ajena al mismo».*

SEGUNDO. Que el fallo *«pone en evidencia otra contradicción del despacho, y es si mi poderdante no está en obligación de probar la culpa por ocurrir el accidente bajo la teoría del ejercicio de una actividad peligrosa, cometiendo la misma imprecisión de la Corte Suprema de Justicia, respecto a los términos de presunción de responsabilidad y presunción de culpa. Estas figuras jurídicas son diferentes pues en una se presume la negligencia y en otra la responsabilidad de actor. En la sentencia del 31 de mayo del 1938, la Corte Suprema manifiesta que en "la presunción de culpa, el agente de la actividad peligrosa se presume responsable". No existe entonces claridad en la teoría planteada por el despacho bajo el entendido de indicar que era lo que tenía que probar el actor, esto es la responsabilidad del señor demandado, indicándose si efectivamente era el quien conducía la moto o si pese a haber cometido la infracción se le puede o no atribuir su culpa...»*

TERCERO: Afirmó que *«[l]a decisión del juez de conocimiento, al parecer se basó en la posición adoptada por el organismo administrativo secretaria de movilidad de Medellín, quien por no contar con suficiente material probatorio*

en el incidente no señaló responsable alguno, pero descuida en el mismo que la condiciones de salud de mi poderdante fueron tan críticas que fue imposible ejercer su derecho de defensa y contradicción, aunado a ello manifiesta la falta de denuncia, que se insiste no fue posible acceder en el término inferior a seis meses a la instauración de la querella por lesiones personales culposas».

CUARTO: Que como quedó probado el hecho dañoso *«mediante la actividad peligrosa en cabeza del conductor del vehículo, la responsabilidad objetiva en la que incurre, el daño acaecido y su nexo causal, conforme la prueba documental y testimonial no tachada de falso, se tiene defender la tesis del máximo órgano de cierre, Corte Suprema de Justicia, en sede de casación, mediante sentencia SC4420-2020 Radicación: 68001-31-03-010-2011-00093-01 Aprobado en Sala virtual de tres de septiembre de dos mil veinte. Magistrado Ponente: LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA».*

DE LA SUSTENTACIÓN EN ESTA INSTANCIA (LEY 2213 DE 2022)

El recurso de apelación fue admitido mediante auto fechado el 3 de marzo de este año (notificado por estados del día 6 siguiente). El 16 de ese mismo mes la parte demandante radicó el memorial que contiene la sustentación del recurso, con el cual se acompañó constancia de haber agotado el trámite previsto en el parágrafo del artículo 9º de la Ley 2213 de 2022.

En el mentado memorial, básicamente, reiteró los argumentos que utilizó para introducir los reparos concretos en contra de la sentencia de primer grado, agregando que:

«La decisión del Despacho se basó en un errado razonamiento de la prueba arrojada en el expediente, apreciaciones que resulta de las siguientes afirmaciones o posiciones:

- *Ausencia de responsabilidad contravencional en el asunto. Manifiesta la entidad administrativa que con las pruebas (croquis y demás anexos), no está debidamente probado la realidad de los hechos.*

Frente a esa decisión ninguno de los implicados hubo de formular [o]posición, precisamente porque se hizo en ausencia de los mismos, por las razones que igualmente se evidencian, pues el conductor del

vehículo también se encontraba lesionado (trauma hombro y politraumatizado).

En la contravención de tránsito, lo que la autoridad administrativa busca determinar quién infringió una norma de tránsito y así proceder a las sanciones que de la misma surjan, no es entonces, rasero para endilgar responsabilidad civil, cuando de la violación normativa resulte un afectado, situación que al parecer determina la decisión de instancia, quien hubo de ver el pobre material probatorio en la contravención, así como la dificultad de las partes en ejercer el derecho de defensa y contradicción en el asunto, pues no había pasado ni dos meses cuando profirieron la resolución, no hubo en esencia, cumplimiento de los requisitos del proceso contravencional, porque no se determinan los mismos, como lo señala la Corte Constitucional en fallo de tutela Sentencia T-061/02 (...).

Podríamos decir entonces que, en materia civil, hay una tarifa probatoria definida, esto es ¿se hace perentorio demostrar la responsabilidad contravencional para efectivamente generar nexo causal entre el hecho y el daño?, será entonces igualmente necesario, determinar la necesidad de un resultado en el proceso penal, como así lo indico el despacho con la segunda situación de ausencia de responsabilidad la "No existencia de proceso penal en contra del demandado".

Lo que, si es claro, es que el señor JUAN MANUEL GONZALEZ MORENO, quedó debidamente identificado, como partícipe del accidente, así lo acredita la prueba documental arrojada en el expediente.

De igual manera se da a entender en el presenta asunto que el responsable del daño fue precisamente el señor demandante conforme las condiciones donde se encontraba, poniéndole en actuar imprudente de su parte, pero igualmente se pasa por alto lo indicado en la misma normativa en materia de tránsito donde se advierte que tanto el ciclista como el peatón tienen prelación en la vía (...).

De acuerdo a las condiciones en que ambos actores viales quedaron con las afectaciones indicadas en su salud, se puede inferir razonadamente que el conductor del vehículo automotor tipo moto excedía la velocidad permitida, de otra manera no se explica cómo pudieron quedar ambas víctimas, las mismas que fueron trasladadas al mismo centro hospitalario, por ello, efectuar investigación del accidente en el lugar de los hechos se hacía casi que imposible efectuar investigación del asunto, máxime que esa no es realmente la función del agente de tránsito...» (sic).

PROBLEMAS JURÍDICOS

De acuerdo con lo decidido y argumentado por la juez de primer grado, y teniendo en cuenta los reproches de la parte apelante, de la siguiente manera pueden plantearse los problemas jurídicos que debe abordar la Sala en esta ocasión:

¿Están acreditados todos los presupuestos axiológicos de la pretensión de responsabilidad civil extracontractual para condenar a la parte demandada?

¿Fue indebida la valoración de la prueba documental relacionada con el trámite contravencional?

CONSIDERACIONES

1. De la responsabilidad en el ejercicio de actividades peligrosas

Para que se verifique la responsabilidad patrimonial, se requiere que el daño se genere como consecuencia de la acción u omisión del demandado, es decir, que exista vínculo de causalidad (modernamente imputación) entre la conducta humana y el daño. En cuanto al elemento subjetivo o psicológico de la conducta, la necesidad de su valoración se impone en los regímenes subjetivos de responsabilidad, los cuales constituyen, en el ordenamiento jurídico colombiano – de marcada tendencia culpabilista –, la regla general (artículo 2341 del Código Civil).

No obstante, hay eventos excepcionales en que resulta posible prescindir del análisis sobre el carácter culposo, como en las situaciones en que aparecen involucrados objetos inanimados empleados en el ejercicio de actividades peligrosas (artículo 2356 del Código Civil). En estos casos, la categoría de la culpabilidad es completamente irrelevante para la determinación de la responsabilidad, razón por la cual la única vía posible de exoneración consiste en la acreditación de una causa extraña, en cualquiera de sus tres modalidades: caso fortuito o fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima,

hecho exclusivo de un tercero. Al respecto, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos:¹

«...a la vera de la responsabilidad civil disciplinada en las normas generales, coexisten regímenes singulares para determinadas categorías, dentro de éstas las atañederas al ejercicio de actividades peligrosas que implican riesgos de tal naturaleza que hacen inminente la ocurrencia de daños...considerada su aptitud de provocar un desequilibrio o alteración en las fuerzas que –de ordinario- despliega una persona respecto de otra, su apreciable, intrínseca y objetiva posibilidad de causar un daño” y, por consiguiente, su idoneidad potencial para lesionar los derechos e intereses tutelados por el ordenamiento jurídico, más allá de la diligencia o cuidado exigible y de los parámetros corrientes.

Trátase de actividades dañosas o riesgosas que no se prohíben, por cuya peligrosidad intrínseca o relativa a los medios de trabajo empleados, es decir por los riesgos y peligros que las caracteriza per se disciplina el deber legal de resarcir los daños causados.

Por esta inteligencia, tiene dicho la Corte, los únicos elementos estructurales de esta especie de responsabilidad son el ejercicio de una actividad peligrosa, la causación de un daño y la relación de causalidad entre aquélla y éste, exigiendo tan sólo que el daño pueda imputarse [...] por los peligros que implican, inevitablemente anexos a ellas, sin requerir la prueba de la culpa para que surja la obligación de resarcir,... y por ello basta la demostración del daño y el vínculo de causalidad...

La víctima, sólo debe probar el daño y la relación de causalidad con la actividad peligrosa y al autor o agente no le basta probar ausencia de culpa, ni diligencia o cuidado, siéndole menester acreditar plenamente el elemento extraño como causa exclusiva del daño, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, la intervención de la víctima o de un tercero...».

¹ Sala de Casación Civil, sentencia de 18 de septiembre de 2009, Exp. 20001-3103-005-2005-00406-01, M.P. William Namén Vargas.

De manera que el régimen de responsabilidad por actividades peligrosas está sujeto a lineamientos particulares:

«en su etiología, ratio y fundamento. Por su virtud, el fundamento y criterio de imputación de la responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento. La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y, el autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y determina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor. En contraste, siendo causa concurrente, pervive el deber jurídico de reparar en la medida de su contribución al daño²».

El artículo 2356 del Código Civil es de carácter meramente enunciativo en cuanto a actividades que comportan peligro; de ahí que la Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia ha catalogado otras actividades como peligrosas, tales como la distribución de energía eléctrica, la conducción de automotores, el manejo de materiales explosivos, la construcción³, teniendo en cuenta naturalmente que con referencia a tales comportamientos o actividades es propio aplicar el régimen de responsabilidad objetiva cuyo factor de imputación jurídica es el riesgo creado.

Ahora bien, es cierto que en sentencias SC3862 de 2019 y 4420 de 2020, entre otras, la Corte ha enseñado que desde la decisión proferida el 14 de marzo de 1938⁴, cuando se trata de actividades peligrosas la responsabilidad del agente ha de presumirse, pero también ha precisado que *«para que el autor del menoscabo sea declarado responsable de su producción, tratándose*

² Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia del veinticuatro (24) de agosto de dos mil nueve (2009), Expediente 11001-3103-038-2001-01054-01, M.P. William Namen Vargas.

³ Ibíd.

⁴ Cfr. G.J. T. XLVI, pág. 211 a 217.

de labores peligrosas, solo le compete al agredido acreditar: el hecho o conducta constitutiva de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad entre éste y aquél⁵».

Así, al demandante le corresponde probar a más de la conducta o actividad peligrosa desplegada por el demandado, el daño y, especialmente, el nexo de causalidad material, *«por cuanto desde el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro⁶»*. De ello resulta necesario memorar que el nexo de causalidad comprende dos aristas, tal como lo recordó la Corte en Sentencia SC2905 de 2021, al denotar:

*«...en la búsqueda del nexo causal concurren elementos **fácticos y jurídicos**, siendo indispensable la prueba -directa o inferencial- del primero de ellos, para lograr una condena indemnizatoria.*

El aspecto material se conoce como el juicio *sine qua non* y su objetivo es determinar los hechos o actuaciones que probablemente tuvieron injerencia en la producción del daño, por cuanto de faltar no sería posible su materialización. Para estos fines, se revisa el contexto material del suceso, analizado de forma retrospectiva, para establecer las causas y excluir aquellas que no guardan conexión, en términos de razonabilidad. Con posterioridad se hace la evaluación jurídica, con el fin de atribuir sentido legal a cada gestión, a partir de un actuar propio o ajeno, donde se hará la ponderación del tipo de conexión y su cercanía.

Juan Manuel Prevof explica este doble análisis así:

[S]e torna imprescindible dividir el juicio de constatación causal en dos fases, secuencias o estadios:

⁵ Cfr. SC3862 de 2019.

⁶ Cfr. CSJ. SC-12994 de 15 de septiembre de 2016, y recientemente la sentencia SC- 2107 de 12 de junio de 2018

1) primera fase (questio facti): la fijación del nexo causal en su primera secuencia tiene carácter indefectiblemente fáctico, es libre de valoraciones jurídicas y, por lo general, se realiza según el criterio de la conditio sine qua non.

2) segunda fase (questio iuris): una vez explicada la causa del daño en sentido material o científico es menester realizar un juicio de orden jurídico-valorativo, a los efectos de establecer si el resultado dañoso causalmente imbricado a la conducta del demandado, puede o no serle objetivamente imputado⁷.

Tal orientación quedó consagrada en la sentencia de 24 de agosto de 2016 de esta Sala, al transcribir el pensamiento de Goldemberg:

No debe perderse de vista el dato esencial de que, aun cuando el hecho causa y el hecho resultado pertenecen al mundo de la realidad natural, el proceso causal va a ser en definitiva estimado de consuno con una norma positiva dotada de un juicio de valor, que servirá de parámetro para mensurar jurídicamente ese encadenamiento de sucesos. Para la debida comprensión del problema, ambos niveles no deben confundirse. De este modo, las consecuencias de un hecho no serán las mismas desde el punto de vista empírico que con relación al área de la juridicidad. En el iter del suceder causal el plexo jurídico sólo toma en cuenta aquellos efectos que conceptúa relevantes en cuanto pueden ser objeto de atribución normativa, de conformidad con las pautas predeterminadas legalmente, desinteresándose de los demás eslabones de la cadena de hechos que no por ello dejan de tener, en el plexo ontológico, la calidad de 'consecuencias' [Goldemberg, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2011, p. 8] (SC13925, rad. 2005-00174-01).

Este doble análisis es viable no sólo frente a las acciones, también respecto a las omisiones, pues la falta de una conducta, cuando era

⁷ Juan Manuel Prevof, *El problema de la relación de causalidad en el derecho de la responsabilidad civil*. En *Revista Chilena de Derecho Privado*, n° 15, 2010, p. 165.

exigible, evidencia un estado de cosas que se mantiene inalterado y que deviene en perjudicial para la víctima. Total que el nexo causal, desde hace muchos años, abandonó la noción naturalística⁸, que propugnaba por una relación físico-corporal, para centrarse en ponderaciones basadas en la idoneidad o adecuación del resultado frente a la conducta que se echa de menos.

Por ello, es necesario que el aspecto fáctico sea probado a través de cualquiera de los medios reconocidos en la codificación procesal...»

(resaltos fuera de texto)

El aspecto que viene de tratarse fue reiterado de forma reciente por la Corte en sentencia SC065 de 2023, para explicar:

«[E]s una condición necesaria para la configuración de la responsabilidad, el cual sólo puede ser develado a partir de las reglas de la vida, el sentido común y la lógica de lo razonable, pues estos criterios permiten particularizar, de los antecedentes y condiciones que confluyen a la producción de un resultado, cuál de ellos tiene la categoría de causa.

Para tal fin, «debe realizarse una prognosis que dé cuenta de los varios antecedentes que hipotéticamente son causas, de modo que con la aplicación de las reglas de la experiencia y del sentido de razonabilidad a que se aludió, se excluyan aquellos antecedentes que solo coadyuvan al resultado pero que no son idóneos per se para producirlos, y se detecte aquél o aquellos que tienen esa aptitud» (SC, 15 ene. 2008, rad. 2000-673-00-01; en el mismo sentido SC, 6 sep. 2011, rad. 2002-00445-01).

*Así las cosas, **en la búsqueda del nexo causal concurren elementos fácticos y jurídicos**, siendo indispensable la prueba -directa o inferencial- del primero de ellos, para lograr una condena indemnizatoria».*

⁸ CSJ, SC de 26 sept. 2002, rad. 6878; 15 ene. 2008, rad. 2000-67300-01; y 14 dic. 2012, rad. 2002-00188-01.

Significa lo dicho que, más allá de la presunción de culpa que podría derivarse del ejercicio de una actividad peligrosa, que releva al afectado de probar tal elemento de la responsabilidad, la carga probatoria de los restantes presupuestos que le son propios permanece incólume y su desatención conlleva al fracaso de las pretensiones, las cuales igualmente caerían al vacío si el presunto responsable acredita, como corresponde, la ocurrencia de alguno de los eximentes que autoriza el legislador...».

(negrita y subraya fuera de texto)

2. De la causa extraña -hecho exclusivo de la víctima-.

La causa extraña como género se compone de hechos o situaciones imprevisibles, irresistibles y exteriores al demandado, a partir de los cuales ninguna responsabilidad puede imputársele. En ese sentido, si bien la causa extraña tiene varias especies (hecho exclusivo de la víctima o de un tercero, fuerza mayor o caso fortuito), lo cierto es que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en estructurar el fondo principalístico que debe observarse dentro de cualquiera de sus vertientes. Por ello, se ha considerado que la definición de causa extraña, en general, deviene del concepto de caso fortuito o fuerza mayor, pues:

*«cumple reiterar...- por la inescindible relación que tiene con el asunto que ocupa la atención de la Corte - que en el Derecho Colombiano los dos presupuestos - ex lege - que estereotipan, como unidad conceptual y como sinonimia legal, al caso fortuito o fuerza mayor, son la **imprevisibilidad** y la **irresistibilidad** (...), en donde brilla por su ausencia un precepto definitorio del fenómeno liberatorio en cuestión, a la par que con el criterio adoptado por esta Corporación, respetuoso de la ley positiva que, se insiste, efectúa la supraindicada caracterización...» (Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 23 de junio de 2000. Expediente 5475. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo.)*

Ahora bien, de manera concreta habrá lugar a considerar la causa extraña cuando se presenta un hecho imprevisible e irresistible, pero teniendo claro

que «*deben estar presentes coetánea o concomitantemente, para la concreción de este instituto jurídico exonerativo de responsabilidad, tal y como ha sido señalado en reiterada jurisprudencia de la Corporación (Sentencias del 26 de julio de 1995 expediente 4785; 19 de julio de 1996 expediente 4469; 9 de octubre de 1998 expediente 4895, entre otras), de forma que si se verifica uno de ellos, pero no los dos, no será posible concederle eficacia alguna, ya que esta es bipolar*»⁹. (negritas del despacho)

Además, algún sector de autorizada doctrina ha considerado que se hace necesaria la exterioridad del hecho alegado como casusa extraña, pues que se trata, como se dijo, de «*un hecho **extraño** al deudor... vale decir que el deudor no haya contribuido a producir...*» y que sea **imprevisible e irresistible**. De suerte que es posible calificar un hecho como imprevisible para el demandado en uso de criterios claros como: «*1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realización, y 3) El concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo*». (Ospina Fernández, Guillermo. Régimen general de las obligaciones. Bogotá D.C: Editorial Temis Edición de 1994. p. 109).

Superado entonces el primer polo del concepto, deberá el juzgador estar atento a que, dentro de la prueba sobre los hechos alegados por el demandado, obre con gran significación la irresistibilidad, en estudio de la cual debe tenerse en cuenta que «*en el lenguaje jurídico, la irresistibilidad debe entenderse como aquel estado predicable del sujeto respectivo que entraña **la imposibilidad objetiva de evitar ciertos efectos o consecuencias derivados de la materialización de hechos exógenos** - y por ello a él ajenos, así como extraños en el plano jurídico - que le impiden efectuar determinada actuación, lato sensu...*»¹⁰. (negritas del despacho).

Es más, esa tarea debe emprenderse sin perder de vista que un «*hecho sólo puede ser calificado como irresistible, si es absolutamente imposible evitar sus consecuencias, es decir, que situada cualquier persona en las circunstancias que enfrenta el deudor, invariablemente se vería sometido a esos efectos*

9 Ibíd.

10 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de junio de 2000. Expediente 5475. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo.

perturbadores, pues la incidencia de estos no está determinada, propiamente, por las condiciones especiales –o personales- del individuo llamado a afrontarlos»¹¹.

CASO CONCRETO PARA LOS REPAROS

Dado que los reparos se orientan a reprochar la decisión de primera instancia, por presuntamente haberse fundado en un inadecuado estudio de la responsabilidad derivada de actividades peligrosas y evidenciar una indebida valoración de las pruebas, especialmente las vinculadas al trámite contravencional, se procederá al análisis conjunto de los mismos.

Centrados en los elementos de juicio que dan cuenta de la participación de los señores Alberto Antonio Martínez Zapata (peatón) y Juan Manuel González Moreno (conductor) en los hechos materia de debate, se advierte que en el expediente obran como pruebas los siguientes:

- Resolución 8585 de 12 de julio de 2010, expedida por la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, en la que previa consideración de *«[q]ue mediante Informe de Accidentes No. A0766969— 0, tuvo conocimiento... de una colisión ocurrida el 09 Junio de 2010, a las 20:40 horas en la Calle 42-30 Con Carrera 81 d a ciudad, en la que aparecen comprometidos los señores JUAN MANUEL GONZALEZ MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No, 1.128.432.413, conductor del vehículo de placas ZJF-20A, CARLOS ALBERTO BEDOYA CADAVID, identificado con la T.I No.94010107606 Pasajero, ALBERTO ANTONIO MARTINEZ ZAPATA, Identificado con cédula de ciudadanía No 15.318.344 Peatón»*, se decidió, al no estar *«debidamente probado la realidad de los hechos que llevase a que este accidente se ocasionara»*, no imputar responsabilidad contravencional (pdf.03 y 68).
- Informe policial de accidente de tránsito y bosquejo del lugar de los hechos (pdf. 03 y 68):

11 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de julio de 2005..Expediente 6569. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo.

3.1 CHOQUE CON: VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/> SEMOVIENTE TREN <input type="checkbox"/> OBJETO FIJO		4. LOCALIDAD O COMUNA Llaneros.		6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 6.1 AREA: URBANA <input checked="" type="checkbox"/> MILITAR <input type="checkbox"/> RURAL <input type="checkbox"/> DEPORTIVA <input type="checkbox"/> 6.2 SECTOR: RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> TRAMO DE VIA <input checked="" type="checkbox"/> INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> INTERSECCIÓN <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> VIA PEATONAL <input type="checkbox"/> 6.3 ZONA: ESCOLAR <input type="checkbox"/> PASO ELEVADO <input type="checkbox"/> PASO INFERIOR <input type="checkbox"/> PASO A NIVEL <input type="checkbox"/>		GLORIETA <input type="checkbox"/> PUENTE <input type="checkbox"/> VIA TRONCAL <input type="checkbox"/> LOTE O PREDIO <input type="checkbox"/> CICLORUTA <input type="checkbox"/> 6.5 TIEMPO: NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> LLUVIA <input type="checkbox"/> VIENTO <input type="checkbox"/> NIEBLA <input type="checkbox"/>			
3.2 OBJETO FIJO MURO <input type="checkbox"/> INMUEBLE <input type="checkbox"/> POSTE <input type="checkbox"/> HIDRANTE <input type="checkbox"/> ARBOL <input type="checkbox"/> VALLA, SEÑAL <input type="checkbox"/> BARANDA <input type="checkbox"/> TARIMA, CASETA <input type="checkbox"/> SEMAFORO <input type="checkbox"/> VEHICULO ESTACIONADO <input type="checkbox"/>		5. FECHA Y HORA 09/08/2010 DIA MES AÑO L M J V S D 20 4 0 2 0 5 0 HORA OCURRENCIA HORA LEVANTAMIENTO							
7.1 GEOMÉTRICAS A. RECTA <input checked="" type="checkbox"/> 1 CURVA <input type="checkbox"/> 2 B. PLANO <input checked="" type="checkbox"/> 1 PENDIENTE <input type="checkbox"/> 2 C. CON BERMAS <input type="checkbox"/> 1 CON ACERAS <input checked="" type="checkbox"/> 2 7.2 UTILIZACIÓN UN SENTIDO <input type="checkbox"/> 1 DOBLE SENTIDO <input checked="" type="checkbox"/> 2 REVERSIBLE <input type="checkbox"/> 3 CICLOVIA <input type="checkbox"/> 4 7.3 CALZADAS UNA <input type="checkbox"/> 1 DOS <input checked="" type="checkbox"/> 2 TRES <input type="checkbox"/> 3		VIA 1 2 CUARTO O MAS <input type="checkbox"/> 4 7.4 CARRILES UNO <input type="checkbox"/> 1 DOS <input checked="" type="checkbox"/> 2 TRES <input type="checkbox"/> 3 CUATRO O MAS <input type="checkbox"/> 4 VARIABLE <input type="checkbox"/> 5 7.5 MATERIAL ASFALTO <input checked="" type="checkbox"/> 1 CONCRETO <input type="checkbox"/> 2 AFIRMADO <input type="checkbox"/> 3 TIERRA <input type="checkbox"/> 4 7.6 ESTADO BUENO <input checked="" type="checkbox"/> 1 CON HUECOS <input type="checkbox"/> 2		VIA 1 2 EN REPARACIÓN <input type="checkbox"/> 4 HUNDIMIENTOS <input type="checkbox"/> 5 DERRUMBES <input type="checkbox"/> 6 PARCHEO <input type="checkbox"/> 7 RIZADO <input type="checkbox"/> 8 INUNDADA <input type="checkbox"/> 9 7.7 CONDICIONES SECA <input type="checkbox"/> 1 HUMEDA <input type="checkbox"/> 2 MATERIAL SUELTO <input type="checkbox"/> 3 ACEITE <input type="checkbox"/> 4 7.8 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL A CON <input type="checkbox"/> 1 SIN <input checked="" type="checkbox"/> 2 B BUENA <input type="checkbox"/> 3 MALA <input type="checkbox"/> 4		7.9 CONTROLES AGENTE <input type="checkbox"/> 1 SEMAFORO <input type="checkbox"/> 2 OPERANDO <input type="checkbox"/> 3 INTERMITENTE <input type="checkbox"/> 4 CON DAÑOS <input type="checkbox"/> 5 APAGADO <input type="checkbox"/> 6 SEÑALES PARE <input type="checkbox"/> 1 CEDA EL PASO <input type="checkbox"/> 2 NO GIRE <input type="checkbox"/> 3 SENTIDO VIAL <input checked="" type="checkbox"/> 4 NO ADELANTAR <input type="checkbox"/> 5 VELOCIDAD <input type="checkbox"/> 6 OTRA <input type="checkbox"/> 7 NINGUNA <input type="checkbox"/> 8		DEMARCACIÓN ZONA PEATONAL <input type="checkbox"/> 1 LINEA DE PARE <input type="checkbox"/> 2 LINEA CENTRAL <input type="checkbox"/> 3 LINEA DE BORDE <input type="checkbox"/> 4 LINEA DE CARRIL <input checked="" type="checkbox"/> 5 OTRA <input type="checkbox"/> 6 REDUCTOR VELOCIDAD <input type="checkbox"/> 7 NINGUNA <input type="checkbox"/> 8 7.10 VISUAL DISMINUIDA POR VEHICULO ESTACIONADO <input type="checkbox"/> 1 ARBOL VEGETACIÓN <input type="checkbox"/> 2 CONSTRUCCIÓN O CASETA <input type="checkbox"/> 3 AVISOS, VALLAS <input type="checkbox"/> 4 POSTE <input type="checkbox"/> 5 OTRA <input type="checkbox"/> 6	
8. CONDUCTORES, VEHICULOS, PROPIETARIOS 8.1 CONDUCTOR 1er APELLIDO, 2do APELLIDO Y NOMBRE: Juan Manuel Gonzalez Hernandez DIRECCIÓN DOMICILIO: El 88A #24-10 LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.: 5986060 CATEGORIA/RESTRICCIÓN EXP. VCTO. OFICINA DE TRANSITO: 02 09308 HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN: Hospital General 8.2 VEHICULO PLACA: 2JF 20A MARCA: Kawasaki LINEA: KLR MODELO: 125 CARGA TONS: 1 INMOVILIZADO EN: No se encuentra A DISPOSICIÓN DE: 8.3 PROPIETARIO 1er APELLIDO, 2do APELLIDO Y NOMBRE: Luis Fernando Ramirez G. DIRECCIÓN DOMICILIO: 1071219 8.4 CLASE VEHICULOS No. 1 AUTOMÓVIL <input type="checkbox"/> 01 BUS <input type="checkbox"/> 02 BUSETA <input type="checkbox"/> 03 CAMIÓN, FURGÓN <input type="checkbox"/> 04 CAMIONETA <input type="checkbox"/> 05 CAMPERO <input type="checkbox"/> 06 MICROBUS <input type="checkbox"/> 07 TRACTOCAMIÓN <input type="checkbox"/> 08 VOLQUETA <input type="checkbox"/> 09 MOTOCICLETA <input checked="" type="checkbox"/> 10 M. AGRICOLA <input type="checkbox"/> 11 M. INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> 12 BICICLETA <input type="checkbox"/> 13 MOTOCARRO <input type="checkbox"/> 14 TRACCIÓN ANIMAL <input type="checkbox"/> 15 OTRO <input type="checkbox"/> 16 MOTOCICLO <input type="checkbox"/> 17 NO IDENTIFICADO <input type="checkbox"/> 18 8.5 SERVICIO OFICIAL <input type="checkbox"/> 1 PÚBLICO <input type="checkbox"/> 2 PARTICULAR <input checked="" type="checkbox"/> 3 DIPLOMÁTICO <input type="checkbox"/> 4 ESCOLAR <input type="checkbox"/> 5 8.6 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SI <input type="checkbox"/> 1 NO <input type="checkbox"/> 2									
9. CROQUIS 									
10. VICTIMAS: PASAJEROS Y PEATONES VICTIMA No. 1: Carlos Alberto Bodega Cadogan DIRECCIÓN DOMICILIO: K74A #88A-51 HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN: Hospital General 11. TESTIGOS 12. HIPOTESIS COD. HIPOTESIS: 1 HIPOTESIS: Nota: No fue posible localizar al conductor porque no lo habrían atendido en el centro asistenciales y el vehículo fue abandonado por lo tanto no hubo fotos. Lesionados: Conductor: Trauma tórax y politraumatizado									



ANEXO No.2
VICTIMAS: PEATONES Y PASAJEROS
PERTENECE AL INFORME DE
ACCIDENTE CON FORMULARIO No.



10. VICTIMAS: PASAJEROS Y PASAJEROS																	
VICTIMA No. <input type="checkbox"/>		1er. APELLIDO, 2do APELLIDO Y NOMBRE										NACIMIENTO		IDIFICACION No.			
No. <input type="checkbox"/>		DIRECCION DOMICILIO										CIUDAD		TELEFONO		VEH. No.	CINTURON
		HOSPITAL, CLINICA O SITIO DE ATENCION										SE LLEVO A BEODEZ		NEGATIVO	GRADO	CASCO	
		Hospital General										EXAMEN DE DROGA		POSITIVO	POSITIVO	SI NO	1 2
VICTIMA No. <input type="checkbox"/>		1er. APELLIDO, 2do APELLIDO Y NOMBRE										NACIMIENTO		IDIFICACION No.			
No. <input type="checkbox"/>		DIRECCION DOMICILIO										CIUDAD		TELEFONO		VEH. No.	CINTURON
		HOSPITAL, CLINICA O SITIO DE ATENCION										SE LLEVO A BEODEZ		NEGATIVO	GRADO	CASCO	
												EXAMEN DE DROGA		POSITIVO	POSITIVO	SI NO	1 2
VICTIMA No. <input type="checkbox"/>		1er. APELLIDO, 2do APELLIDO Y NOMBRE										NACIMIENTO		IDIFICACION No.			
No. <input type="checkbox"/>		DIRECCION DOMICILIO										CIUDAD		TELEFONO		VEH. No.	CINTURON
		HOSPITAL, CLINICA O SITIO DE ATENCION										SE LLEVO A BEODEZ		NEGATIVO	GRADO	CASCO	
												EXAMEN DE DROGA		POSITIVO	POSITIVO	SI NO	1 2
VICTIMA No. <input type="checkbox"/>		1er. APELLIDO, 2do APELLIDO Y NOMBRE										NACIMIENTO		IDIFICACION No.			
No. <input type="checkbox"/>		DIRECCION DOMICILIO										CIUDAD		TELEFONO		VEH. No.	CINTURON
		HOSPITAL, CLINICA O SITIO DE ATENCION										SE LLEVO A BEODEZ		NEGATIVO	GRADO	CASCO	
												EXAMEN DE DROGA		POSITIVO	POSITIVO	SI NO	1 2
VICTIMA No. <input type="checkbox"/>		1er. APELLIDO, 2do APELLIDO Y NOMBRE										NACIMIENTO		IDIFICACION No.			
No. <input type="checkbox"/>		DIRECCION DOMICILIO										CIUDAD		TELEFONO		VEH. No.	CINTURON
		HOSPITAL, CLINICA O SITIO DE ATENCION										SE LLEVO A BEODEZ		NEGATIVO	GRADO	CASCO	
												EXAMEN DE DROGA		POSITIVO	POSITIVO	SI NO	1 2
OBSERVACIONES:																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>VICTIMA No. <input type="checkbox"/></p> <p>10.1 CONDICION</p> <p>PASAJERO <input checked="" type="checkbox"/> PASAJERO</p> </div> <div> <p>VICTIMA No. <input type="checkbox"/></p> <p>10.2 SEXO</p> <p>MASCULINO <input checked="" type="checkbox"/> FEMENINO</p> </div> <div> <p>VICTIMA No. <input type="checkbox"/></p> <p>10.3 GRAVEDAD</p> <p>MUERTO <input type="checkbox"/> HERIDO <input checked="" type="checkbox"/></p> </div> </div>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>NOMBRES Y APELLIDOS</p> <p>FIRMA</p> </div> <div> <p>PLACA</p> <p>ENTIDAD</p> </div> </div>																	

- La historia clínica de la víctima directa, quien fue atendido en el Hospital General de Medellín el 10 de junio de 2010, donde se describe a las 00:25 horas: *«Alberto de 54 años quien el día de hoy sufre accidente de tránsito en calidad de peatón, sufriendo trauma craneano, y trauma en muslo derecho con dolor deformidad y limitación a la movilidad. Refiere no recuerda que pasó...»* (pdf.68, pp.14-15).
- Certificación expedida por el Hospital General de Medellín, para indicar *«que el señor(a) ALBERTO ANTONIO MARTINEZ ZAPATA con número de identificación 15.318.344, Ingresó a nuestra institución el 09 de junio del año 2010 por accidente de tránsito, ha superado el tope por SOAT correspondiente a los 800 salarios mínimos legales vigentes, se ha facturado a la compañía QBE Seguros un valor de \$ 8.583.000 y por el Consorcio Fidufosyga un valor de \$ 5.149.800»*.
- Copias de licencia de conducción de Juan Manuel González Moreno, Soat de la motocicleta con placa ZJF20A expedido por QBE Seguros y documentos de propiedad de dicho rodante.

Ahora, con relación a la prueba documental aludida, huelga acotar que esta constituye la única evidencia, por lo menos al interior de este proceso, recaudada para dar cuenta no solo del hecho o conducta constitutiva de la actividad peligrosa, sino también de la estructuración de los demás presupuestos que interesan al buen suceso de la responsabilidad que hoy se reclama.

Lo anterior porque del interrogatorio de parte a la víctima directa no se extrae con suficiente claridad cuáles fueron las circunstancias precisas de lo ocurrido el día del accidente, en tanto que sobre ello solo expresó: *«yo iba a hacer unas compras, pasé la calle... a comprar unas cosas...yo miré pa' todas partes, yo llevo tiempo pasando ese sector... trabajaba en ese sector...cuando pasaba la calle yo miré pa' todas partes como siempre mira uno a ver que carro viene... no venía nadie, ya venía llegando yo al separador, iba a montar el pie y ahí no me acuerdo más... cuando llegué a la izquierda una moto como que me cogió... y no me acuerdo de más nada, porque ahí quedé inconsciente»*

Y al preguntarle la juez de primer grado *«usted dice que cuando se iba a montar al separador usted no se acuerda de nada más, ¿cómo supo usted que efectivamente la moto que lo atropelló es la moto de placa ZJF20A y que estaba conducida por el demandado?»* respondió *«tenía que haber sido él, porque... carros no vi cuando yo iba a pasar la calle, ya llegando al separador yo monté el pie y yo no vi ninguna luz... o sea que si fue esa moto venía a oscuras... se volaron me dijeron a mí después del accidente, yo quedé inconsciente... yo desperté a los tres días...»* (pdf.84)

Los restantes medios probatorios, concretados en las declaraciones de la codemandante María Cristina Agudelo Acevedo; de los terceros Daniela Martínez Agudelo y Vicente Arnulfo Martínez Roldan, y la prueba pericial vinculada con la pérdida de capacidad laboral del señor Alberto Antonio Martínez Zapata, no permite auscultar sobre el hecho calamitoso, pues, los mismos, solo fueron perfilados a la comprobación de los perjuicios causados a los demandantes, más de ningún modo, aportan alguna otra particularidad sobre el suceso.

Pues bien, visto así el escenario probatorio, para este Tribunal las pruebas relativas al informe de tránsito y trámite contravencional permiten inferir que

el 9 de junio de 2010 tuvo lugar un accidente de tránsito que involucró el actuar del señor Alberto Antonio Martínez Zapata, en calidad de peatón, y el señor Juan Manuel González Moreno como conductor de la motocicleta de placa ZJF20A, de propiedad del fallecido Luis Fernando Ramírez Gómez. Empero ningún medio de persuasión permite determinar la causa fáctica que devino en la producción del daño, en tanto que no se probó ni cómo ni por qué ocurrió el siniestro; olvidando la parte demandante que si bien estaba relevada de acreditar la culpa, no ocurría lo mismo frente a la causalidad física o imputación fáctica.

En tal sentido, la acreditación del nexo causal no puede entenderse como una labor que deba descartar quien pretenda el resarcimiento de un daño presuntamente causado en el ejercicio de actividad peligrosa; de ahí se explica que en la sentencia SC3862 de 2019, cuyo estudio comprendió un asunto de similares contornos al que ahora nos ocupa, la Corte, no obstante la presunción de responsabilidad que allí predicó, haya exigido:

*«para resolver con acierto si el actor era o no responsable del siniestro de tránsito, o en su defecto, establecer, ya el quiebre del nexo causal por la causa extraña, ora la concausalidad, **resultaba necesario precisar las causas del impacto**, lo cual, compelia repasar el esquema fáctico propicio para la demostración de esa clase de accidentes.*

Era indispensable, en consecuencia, escrutar, a través de las acervo probatorio practicado y recaudado, (i) la descripción del lugar de la colisión¹² (vgr. la anchura o uniformidad de la vía, topografía y señales de tránsito del sector circundante antes y después del punto de colisión, el estado del tramo vial); (ii) los factores de importancia en el iter del choque¹³ (hora, condiciones atmosféricas, características del flujo vial al momento del impacto, campo de visibilidad, la ubicación de los vehículos luego del suceso, así como su examen mecánico, entre ellos, las señales acústicas y luminosas, las condiciones de los neumáticos, huellas de frenado, detritus de vidrios, fango o barniz desprendidos de los automotores por efectos de la colisión); (iii) los aspectos atinentes al comportamiento de los involucrados (averiguado mediante las versiones de éstos o mediante testigos presenciales del hecho)¹⁴; y (iv) las

¹² Ferrari Paolino. "Infortunistica stradale scientifica: Guida all'accertamento del sinistro a fine giuridico". Giuffrè, 2002.

¹³ Ídem.

¹⁴ Obra cit., ídem.

conclusiones sobre las comprobaciones fácticas acerca de las razones que provocaron el accidente»¹⁵.

(negrita fuera de texto)

Los supuestos trasuntos, en contraste con los medios probatorios que aquí reposan y de los cuales se hizo previa reseña, permiten concluir que en este proceso no se logró establecer si la conducta constitutiva de la actividad peligrosa atribuida a los demandados fue la causa física determinante del daño. Obsérvese:

Si bien está probado que el 9 de junio de 2010, en la calle 42 con carrera 81 D de Medellín, ocurrió un accidente de tránsito en el que participaron los señores Juan Manuel González Moreno, conductor del vehículo tipo moto de placa ZJF-20A, y Alberto Antonio Martínez Zapata como peatón, las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos son desconocidas para este proceso, impidiéndose así que puedan establecerse las causas del atropellamiento, máxime cuando es el mismo peatón quien en tono de duda manifestó en su interrogatorio: *«cuando pasaba la calle yo miré pa' todas partes como siempre mira uno a ver que carro viene... no venía nadie, ya venía llegando yo al separador, iba a montar el pie y ahí no me acuerdo más... cuando llegué a la izquierda **una moto como que me cogió...** y no me acuerdo de más nada... **tenía que haber sido él** [el conductor], porque... carros no vi cuando yo iba a pasar la calle...**o sea que si fue esa moto venía a oscuras...** se volaron me dijeron a mí después del accidente, yo quedé inconsciente...»* (ver pdf. 86, primer link, minuto 17:00).

Además, la prueba del informe de accidente de tránsito no es suficiente para esclarecer la forma en qué se presentó la contribución o participación de las partes en la causa de los hechos, tanto más cuando en su ítem 12, destinado a las «Hipótesis, y «Cod. Hipótesis» ninguna descripción se hizo. Es más, en dicho espacio solo se expresó *«Nota: no fue posible la alcoholemia del conductor, ya que no le habían atendido en el centro asistencial. El vehículo fue guardado, por lo tanto, no hubo fotos. Lesiones conductor...»*.

¹⁵ Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil SC3862 de 2019.

En suma, la autoridad de tránsito expresó sobre las condiciones del lugar en que ocurrió el insuceso, que se trató de una vía urbana, de doble sentido, calzada y carril, recta, plana, que estaba seca y en buenas condiciones de iluminación y sin visual disminuida. Esas particularidades, antes de ser indicativas del nexo de causalidad material que debía probar la parte actora, quien, se itera, no cumplió con la carga a que estaba compelida para probarlo, eventualmente se habrían erigido como situaciones llamadas a cuestionarlo, pues lo único que de ellas podría inferirse es la alta participación de la víctima en el fatídico suceso, en tanto que es inobjetable que este incidió en su propio infortunio, es decir, creó su propio riesgo, porque, sin duda, intervino en la vía sin acatar las disposiciones que le exigían transitar *«por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos»* desacatando que *«[c]uando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo»* como lo exigen los artículos 57 y 58 de la ley 769 de 2012.

Para este evento todo lo que se sabe es que el demandante Alberto Antonio Martínez Zapata, como peatón, estuvo involucrado en un accidente de tránsito en el que intervino un conductor a bordo de una motocicleta, nada más; hecho que, a pesar de regirse en línea de principio por las reglas de la responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas, no exoneraba de acreditar el nexo de causalidad desde una perspectiva fáctica, para lo que resultaba inexcusable *«la prueba –directa o inferencial–»* que permitiera comprobar el nexo de causalidad desde *«el aspecto material»*, que se conoce como *«el juicio sine qua non y su objetivo es determinar los hechos o actuaciones que probablemente tuvieron injerencia en la producción del daño, por cuanto de faltar no sería posible su materialización. Para estos fines, se revisa el contexto material del suceso, analizado de forma retrospectiva, para establecer las causas y excluir aquellas que no guardan conexión, en términos de razonabilidad»* para luego realizar *«la evaluación jurídica, con el fin de atribuir sentido legal a cada gestión, a partir de un actuar propio o ajeno, donde se hará la ponderación del tipo de conexión y su cercanía¹⁶»*.

Como viene de verse, para este Tribunal es claro que la parte demandante abandonó la carga probatoria a que estaba convocada conforme lo prescribe

¹⁶ Cfr. Sentencia SC2905 de 2021.

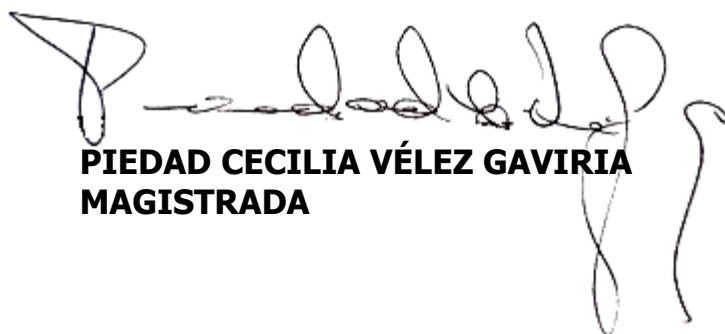
el artículo 167 del CGP, de allí que deba confirmarse la decisión apelada, en tanto que no puede declararse a los demandados civilmente responsables, precisándose que el decaimiento de las pretensiones obedece a la ausencia de prueba del nexo de causalidad, en la forma que quedó expuesto en este proveído, relevándose, como efecto de ello, de la necesidad de ahondar en el estudio del daño y de los medios de defensa enarbolados por la pasiva, pues a esto último solo habría lugar, de haberse acreditado todos los elementos estructurales de la pretensión.

DECISIÓN

Sin más consideraciones, la Sala Cuarta de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** la sentencia de procedencia y fecha indicadas. **Sin costas** en esta instancia, dado el amparo de pobreza concedido a la parte actora.

Ejecutoriada esta providencia regrese el expediente al despacho de origen.

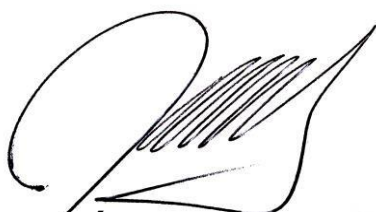
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE



PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
MAGISTRADA



JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
MAGISTRADO



JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
MAGISTRADO
(con salvamento de voto)

Firmas son de la siguiente causa:

S - 058

Procedimiento: Verbal

Demandantes: Alberto Antonio Martínez Zapata y María Cristina Agudelo Acevedo

Demandados: Juan Manuel González Moreno y herederos de Luis Fernando Ramírez Gómez

Radicado Único Nacional: 05001 31 03 002 2019 00160 01

Procedencia: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín

Decisión: Confirma sentencia apelada

Firmado Por:

Piedad Cecilia Velez Gaviria

Magistrada

Sala 002 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ef148e3e61634025d974aac000af270141590a29ab46a358717479fd91823e1f**

Documento generado en 08/05/2023 05:20:29 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>